
Documentos de Discusión Global



MOVILIZACION SOCIAL Y POLITICA DEL GAS EN BOLIVIA

Sanna Stockstrom

No. 8, Julio 2004

D3e
DESARROLLO
ECONOMIA
ECOLOGIA
EQUIDAD

Magallanes 1334, Montevideo
Casilla Correo 13125, Montevideo 11700, Uruguay
www.globalizacion.org
d3e@internet.com.uy

Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina. Pero también es uno de los más ricos: posee enormes reservas de gas natural. Es una nación gravemente endeudada que requiere desesperadamente un impulso para lanzar definitivamente su desarrollo económico. Por esa razón, si la riqueza del gas se aprovechara inteligentemente, podría ser un factor clave para salir de la pobreza. Pero, ¿cómo se debería aprovechar esos recursos? ¿Cómo lograr el mayor beneficio para los bolivianos? Ese tipo de interrogantes fueron uno de los factores relevantes en las movilizaciones ciudadanas de septiembre y octubre de 2003, y también de los debates y posiciones a lo largo de 2004, que desembocaron en un referéndum vinculante para definir la política energética, realizado el domingo 18 de julio.

Los movilizaciones del año pasado terminaron con varios enfrentamientos de gravedad, la muerte de 78 personas, muchos heridos, y la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El vicepresidente Carlos Mesa finalmente asumió la primera magistratura el 17 de octubre, en una peligrosa situación de inestabilidad política, causada por la baja credibilidad y legitimidad que el gobierno anterior generó por su criticada política de gas. Con esa convocatoria se cumplía el compromiso del nuevo presidente Mesa de realizar una consulta sobre la política nacional de gas luego de los lamentables sucesos de octubre.

¿Cómo puede provocar una política, que está considerada por muchos especialistas únicamente como una cuestión técnica, causar tantas movilizaciones sociales? Los hechos recientes demuestran que la política nacional de gas estuvo, y todavía está, fuertemente vinculada con demandas sociales y políticas. Apelando a esos nexos, e incluso reforzándolos, varios líderes sociales han podido movilizar distintos sectores de la sociedad civil. Han promovido la visión de una doble bendición para Bolivia: la esperanza de un desarrollo económico exitoso que se realiza mano a mano con un profundo cambio político-social de la sociedad boliviana y sus instituciones.

En ese camino se han utilizado básicamente tres discursos estrechamente relacionados:

1. el discurso del fracaso del paradigma neoliberal sobre el desarrollo,
2. el del “neo-colonialismo”, que está fuertemente vinculado con el primero, y,
3. el del nacionalismo.

De alguna manera, el referéndum a favor de una política intervencionista sobre el mercado confirma la primera posición que alude al fracaso de las opciones neoliberales. Pero en el reciente debate promovido por algunos dirigentes radicales representando demandas sectoriales se revelan tendencias peligrosas para la democracia boliviana, que parece afectar “la buena causa” que originalmente incitó a los movimientos sociales a su “guerra del gas”. Pero, por otro lado, aquellas causas justificables han sido rescatadas por la actitud de la población boliviana en el día del referéndum. A pesar de las amenazas de bloqueo, paro cívico o la quema de mesas electorales, el día de votación se vivió en tranquilidad, con una renovada actitud cívica, demostrando que la población se aleja de algunos dirigentes radicales y apuesta por la democracia pacífica y la institucionalidad del país que la representa.

Recordemos que el referéndum vinculante de gas consistió en cinco preguntas, cada una enfocándose en un aspecto de una posible nueva ley de hidrocarburos definiendo un nuevo papel del Estado en la economía: la primera busca el (des)acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos del año 1996 y la tercera trata de la refundación de la empresa petrolera estatal. La última y la cuarta se refieren a la exportación del gas y al nivel de impuestos y regalías, mientras la segunda, considerada como la más importante, pregunta por la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano.

Tuvo lugar una fuerte polémica alrededor de las cinco preguntas, algunas de las cuales son sumamente complejas lo que abre el espacio para la interpretación sobre su supuesto contenido. La pregunta dos, por ejemplo, puede entenderse como una nacionalización que incluye la expropiación de las transnacionales, o sea, la anulación de los contratos ya existentes, como lo interpreta por ejemplo el MAS; mientras el gobierno hizo una campaña para una nacionalización “responsable” que significa no tocar los contratos con los transnacionales y nacionalizar estos recursos en 40 años cuando vencen los contratos y nacionalizar en un plazo inmediato los recursos no tocados por dichas convenciones.

El resultado del referéndum arrojó que la mayoría de los bolivianos votó en todas las preguntas por el “sí”. La aprobación más alta la recibió la supuesta

nacionalización con el 92% de aprobación según el conteo oficial; la aprobación más baja en 57.5% para la pregunta cuatro que sugiere usar el recurso de gas estratégicamente para lograr la salida soberana al océano Pacífico. La ambigüedad de las preguntas abre el camino para la discusión sobre la interpretación de los resultados y sobre el futuro rol del Estado en esta temática ¹.

El discurso de la crisis del paradigma neoliberal sobre el desarrollo

Las reformas estructurales de sesgo neoliberal recomendada por el “Consenso de Washington”, tales como la privatización, el fomento de la inversión extranjera, la liberalización del mercado y su apertura hacia el mercado global, se implantaron en Bolivia desde el año 1985 bajo el nombre “Nueva Política Económica”. Esa estrategia apenas logró una reducción global de un punto porcentual en la incidencia de la pobreza ². En los demás índices del desarrollo humano hubo pequeños avances, como, por ejemplo, en la mortalidad infantil, pero en general los resultados se quedaron atrás de las expectativas. El grupo de los “perdedores” de la década de modernización boliviana parecía más grande que el de los “ganadores”. Además, posiblemente los ricos se enriquecieron aún más mientras los pobres tenían que asumir los efectos negativos de las reformas ³.

La mala experiencia resultante de las políticas neoliberales fue utilizada por los líderes sociales para criticar la propuesta del gobierno Sánchez de Lozada de una política nacional de gas. La ley de hidrocarburos vigente en Bolivia desde 1996, que ha sido el centro del referéndum vinculante, establece un nivel de impuestos y regalías de 18% para pozos nuevos y 50% para los existentes, así como otorga la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo a las empresas privadas. La propuesta del gobierno, presentada en 2003, se basó en esa ley. En el sentido neoliberal, se promovió la privatización, reducción de los impuestos y regalías y se dio prioridad a la exportación del energético (especialmente hacia Estados Unidos y México) en vez de su industrialización en el país. La salida de esas exportaciones a su vez generaron otra enorme polémica ya que existían dos opciones posibles: un puerto chileno o uno peruano. En Bolivia, donde la

pérdida de la salida al Océano Pacífico tras una guerra con Chile sigue siendo una herida abierta, el favoritismo del gobierno de Sánchez de Lozada por la opción chilena incrementó la polémica.

Esa posición fue promovida por la coalición gubernamental, especialmente por el partido del Presidente Sánchez de Lozada, el MNR (Movimiento Nacional Revolucionario). Aunque los otros dos partidos de la coalición, el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) liderado por el ex presidente Jaime Paz Zamora, y el NFR (Nueva Fuerza Republicana) de Manfred Reyes Villa tenían algunos desacuerdos con la posición del MNR, especialmente sobre el puerto de exportación y la industrialización del gas, apoyaron básicamente esa nueva política. Se sumó además la UCS (Unión Cívica Solidaria) liderado por Johnny Fernández y el ADN (Acción Democrática Nacionalista) del ex mandatario Jorge Quiroga (cabe recordar que fue éste último el que encauzó la política de gas desarrollado por el gobierno de Sánchez de Lozada). Se sobreentiende que las empresas petroleras transnacionales (Pacific LNG y Sempra Energy), pero también el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ejercieron una gran presión sobre el gobierno de Sánchez de Lozada para que éste mantenga la línea neoliberal en la política nacional de gas.

Desde otra perspectiva distinta, los líderes sociales exigían el retorno a un nuevo papel interventor del Estado en la economía y una mirada hacia el mercado interno. Esta posición fue sostenida por Evo Morales del MAS (Movimiento al Socialismo), y Felipe Quispe del MIP (Movimiento Inca Pachacuti). También se sumaron los sindicatos, incluyendo la COB (Central Obrera Boliviana), el sindicato más fuerte de Bolivia, liderado por Jaime Solares, junto a la COR El Alto (Central Obrera Regional de El Alto). Para asegurar que los ingresos obtenidos por la explotación del gas beneficiaran a todos los bolivianos, los movimientos sociales promovieron una serie de ideas: la nacionalización de los recursos hidrocarburos que, por los contratos ya existentes con algunas empresas petroleras, significaría una expropiación de los mismos; la industrialización del gas en Bolivia y el rechazo total de su exportación como simple materia prima; y, finalmente, el incremento de las regalías e impuestos a un mínimo de 50% de los ingresos de la venta del gas. Paralelamente a esas ideas, demandaron la realización de un referéndum vinculante que permita decidir a toda la población sobre el destino del gas y la revisión del ley de hidrocarburos del año 1996, junto a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

¹ Ilya Fortún (2004): “Si, pero no”, La Razón, 19 de Julio, p. A4.

² PNUD, 2002: Informe de Desarrollo Humano en Bolivia, La Paz: Plural.

³ Nancy Birdsall, Augusto de la Torre y Rachel Menezes (2001): Washington Contentious. Economic Policies for Social Equity in Latin America, Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.

La demanda por un referéndum y una Asamblea Constituyente demuestra la fuerte vinculación del tema de gas con asuntos políticos. Los movimientos sociales venían reclamando por mucho tiempo más participación popular en decisiones políticas nacionales. Un referéndum vinculante, como un instrumento de la democracia directa, satisface este deseo por cogestión social. Sin embargo, este tipo de participación popular es solamente ocasional, por lo que la Asamblea Constituyente, en cambio, promete una más profunda reforma del sistema político y la integración de mecanismos de control y participación popular más amplias.

Mientras los partidos tradicionales tales como MNR, NFR, MIR y ADN tienen su electorado principalmente en la clase alta y media, los movimientos sociales representan las clases populares, en su mayoría indígenas, campesinos andinos (MIP) o cultivadores de coca, “cocaleros” (MAS).

Esos movimientos tienen además una cierta regionalización espacial debido a las migraciones dentro de Bolivia, especialmente del campo hacia la ciudad o del altiplano hacia los valles. Por esa razón, muchas familias que antes eran mineros pasaron a ser “cocaleros” en el oriente de Bolivia, y otros tantos que eran campesinos ahora viven en la periferia de la capital La Paz en la ciudad de El Alto, una urbanización que creció rápidamente en la década de reformas modernistas. No es sorprendente entonces que El Alto se convirtiera en la “capital” del levantamiento popular, porque allí residen muchos de los perdedores de las políticas de modernización: *“allí están gran partes de los 24.000 mineros desempleados y “relocalizados” por la cierre de la Corporación Minera de Bolivia, los migrantes aymaras del altiplano afectados por el minifundio y la pobreza de sus comunidades, desocupados, trabajadores precarios y comerciantes informales (...) todos resultantes del ciclo de reformas “modernizadoras”*⁴. Fue en El Alto donde nació la gran oposición en contra de la venta del gas y donde se lamentaron la mayoría de los heridos y muertos. Se estima que un 90% de la población de El Alto son de origen aymará y especialmente ellos tienen todavía vínculos muy fuertes con sus comunidades de origen, así que el enfrentamiento urbano se extendió fácilmente a las regiones rurales.

El MAS tiene también mucho apoyo en las clases medias progresivas. Esa simpatía se manifestó en los días de octubre cuando mucha gente de las clases medias y altas se unieron con los manifestaciones pacíficas en contra del gobierno Sánchez de

Lozada en la ciudad de La Paz. Algunos analistas creen que la huelga de hambre declarada por la ex defensora del pueblo Ana María Romero de Campero y algunos intelectuales progresivas de la clase media incidieron en desencadenar la renuncia del presidente, en la medida que esta huelga demostró que los partidos tradicionales perdieron sus propias bases por las masacres en las calles⁵.

Cuando Carlos Mesa asumió el mando en octubre de 2003, incorporó en la agenda del Poder Ejecutivo las demandas de los movimientos sociales. Pero más allá de ello, el alzamiento era de tal magnitud que la cuestión quedó definitivamente legitimada. Especialmente después de la exitosa realización del referéndum será difícil para los críticos del NFR cuestionar la base legal de la consulta y seguir criticando su legitimidad y legalidad.

De igual manera, frente a un apoyo tan fuerte a un Estado interventor en la política nacional de gas se puede sostenerse que la insurgencia básicamente indígena-campesina en Bolivia es una de las recientes revoluciones exitosas en América Latina en contra de las políticas neoliberales del Consenso de Washington. Su éxito ha conseguido conseguir iniciar un proceso de cambio en el paradigma económico convencional.

El gas como catalizador contra el “neo-colonialismo”

Aparte de la discusión sobre el paradigma económico que inició la “guerra de gas” se puede observar que en el manejo de los recursos naturales se agravan los contrastes sociales, económicos y políticos de la sociedad boliviana. Hasta cierto punto, el gobierno Sánchez de Lozada provocó los hechos de octubre al insistir en manejar el tema del aprovechamiento de gas en una manera técnica-económica neoliberal y subestimar el aspecto político-social que está incorporado en la explotación de recursos naturales en Bolivia.

En la década de 1950 la propiedad de la tierra simbolizaba un sistema de exclusión rígida de la mayoría de la población, y desembocó en la reforma agraria. En el año 2000 fue “la guerra del agua” en Cochabamba, donde el aumento del precio de este recurso natural aplicado por la transnacional Bechtel provocó el levantamiento del pueblo. La empresa debió abandonar el país. Finalmente, en “la guerra del gas” se convirtió el asunto del aprovechamiento de un recurso natural en una cuestión simbólica de la inclusión o exclusión de la mayoría

⁴ Pablo Stefanoni (2004): “El Alto, ciudad aymara rebelde”, *Le Monde Diplomatique*, 3 (20): 4-5.

⁵ Compara, por ejemplo, Walter Chávez (2003): “Bolivia, una revolución social democrática”, en: *Le Monde Diplomatique*, 2 (14): 7-9.

de los bolivianos, los indígenas y campesinos, en la sociedad y el Estado boliviano. Por eso no se observó el año pasado una insurgencia repentina en contra de la exportación del gas. Más bien, lo que se pudo observar fue una insurgencia lenta, pero siempre en aumento, que se fue fortaleciendo y articulando desde el año 2000. Apuntaban a las estructuras sociales y políticas que, según ellos, no representan su cultura, sino, al contrario, la opresión a la que son sometidos como resultado del “neocolonialismo”, es decir, “*de la colonialidad y la transnacionalización de la economía promovida por la oligarquía conservadora boliviana*”⁶.

Durante los últimos 250 años había movimientos insurgentes indígenas organizados en la misma manera, con el mismo motivo y las mismas estrategias de “lucha” en contra de las autoridades foráneas: el anhelo por autonomía y representación política legítima. Es decir, soberanía indígena con ley propia⁷. Esta es la posición de los líderes indígenas radicales, como por ejemplo Felipe Quispe (“el Mallku”), dirigente aymara de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuya visión es una “nación aymara” en un “país aymara” sin influencia de los cánones establecidos por siglos de colonización y dominio externo. “*Ya no somos los sirvientes, somos los indios de la posmodernidad, aunque algunos parecen no entenderlo*”⁸, afirmó Quispe en alguna oportunidad. En este sentido, la política nacional de la explotación de gas en los términos que planteaba el gobierno de Sánchez de Lozada tan sólo era una réplica de estructuras y procesos coloniales y supresión de los “indios” por los “criollos”. Por lo tanto, la propuesta del gobierno se convirtió en un catalizador para hacer eclosionar esas antiguas frustraciones.

Más allá de ser un catalizador, el gas parece ser el último bastión a defender, entendido como un símbolo de todos los recursos naturales perdidos durante siglos: ni la plata, ni el oro, ni el estaño sirvieron para modernizar el país e impulsar su desarrollo, superando así desigualdades sociales y

económicas⁹. Todo lo contrario: se enriqueció aún más la elite criolla reinante en la república, mientras fueron los “indios” quienes se murieron en las minas bajo pésimas condiciones de trabajo. Explotar los recursos de gas para luego exportarlos parece imposible en Bolivia, porque se convirtió en el símbolo de la explotación de la tierra y de su gente observada durante siglos y a la cual los indígenas están ahora decididos a poner un final. En este simbolismo, la empresa transnacional se asemeja al conquistador, y sus actividades de explotación y la posible exportación se parece al “robo” de las minas durante el período de la colonia, dando como resultado que el “extranjero”, el “conquistador”, gana todo a costa de los bolivianos, quienes pierden sus recursos y se empobrecerán aún más, habida cuenta de que la economía de extracción no deja nada productivo sino sólo destrucción.

Según los líderes sociales, todos los partidos tradicionales son parte de esa “oligarquía conservadora boliviana”, que buscaría explotar al país y su gente. El periodista Mirko Orgaz, en su libro “La Guerra por Gas”, denunció que existía una fuerte campaña para ocultar el verdadero sentido del negocio de exportación del gas, liderada por un grupo de la oligarquía tarijeña que buscaba beneficiarse con “*algunas migajas del megaproyecto y que se ha sumado de cuerpo entero al carro de las transnacionales*”. Andrés Gómez Vales añade: “*La historia en Bolivia se repite, así como el grupo apátrida que la gobierna*”¹⁰. Ambos periodistas reclaman que con el negocio del gas nació una nueva estructura de poder alrededor de este recurso natural, cuyo epicentro ocuparían las transnacionales rodeadas por los grupos oligárquicos intermediarios del negocio, tal como las élites políticas tradicionales de Tarija y concluyen, que “*La oligarquía, acostumbrada en la historia a intermediar el saqueo de los recursos naturales de la nación, fue y es una maldición para Bolivia*”.

Este discurso confrontativo revela un conflicto entre básicamente dos grupos sociales dominantes en Bolivia: el grupo de la “oligarquía conservadora boliviana” a lo cual algunos intelectuales progresivos clasifican la mayoría de los “k’ara”¹¹ o “criollos”, los descendientes de los Conquistadores, representados por sus partidos tradicionales; y por otro lado, los indígenas, que forman casi 70% de la población y cuya representación política son los movimientos sociales. Pero aunque son la mayoría,

⁶ Felix Patzi (2003), *Rebelión indígena contra la colonialidad y la transnacionalización de la economía. Triunfos y vicisitudes del movimiento indígena desde 2000 a 2003*, p. 200, en: Hylton F. et al, *Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia indígena*, La Paz: Muela del Diablo Editores.

⁷ Compara las investigaciones históricas realizadas por Forrest Hylton, Felix Patzi, Sergio Serulnikov y Sinclair Thomson (2003): *Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia indígena*, La Paz: Muela del Diablo Editores.

⁸ F. Quispe, citado por Pablo Stefanoni (2004), pág. 4.

⁹ Irving Alzaraz (2001): *Bolivia Hora Cero*, La Paz: Plural, 2da edición.

¹⁰ Andrés Gómez Vela (2002): “La guerra del gas en Bolivia”. Revisión del libro por Mirko Orgaz, *El Juguete Rabioso*, Agosto, p. 16.

¹¹ “k’ara” significa en aymará “hombre blanco”; la palabra está usada como una ofensa.

forman la minoría en la ocupación de posiciones claves de la sociedad. En esta lucha entre grupos sociales la mayoría de la población, los indígenas, reclaman su representación política y social en una sociedad que esta dominada por la poderosa minoría de los criollos.

Algunos reportajes sobre las condiciones locales en la explotación del gas incrementaron esa visión de neo-colonialismo. Recordemos que más del 80% del área donde se encuentran las reservas de gas bolivianas corresponde a territorios del pueblo indígena Guarani. En los últimos años, las demandas de los guaraníes por la reconstitución de sus tierras están inevitablemente bloqueadas por el desarrollo gasífero nacional. Mientras más reservas de gas se descubren, menos le queda de territorio a los guaraníes. De las solicitudes que éstos presentaban por propiedad territorial, al amparo de la legislación boliviana en la materia, menos del 7% les fueron concedidas desde que se inició la explotación del gas¹². El argumento es que mientras algunos pocos ya se están enriqueciendo con la explotación del gas, los guaraníes que viven muy cerca de los pozos, siguen sufriendo de desnutrición y el índice del desarrollo humano de sus municipios es – también en comparación con otros municipios bolivianos - bajo (0.569)¹³.

Los reportajes de prensa de una de las áreas de explotación, el campo Margarita, ilustran muy bien esos problemas. Allí, la empresa española Repsol, además de apropiarse del gas empezó a explotar los acuíferos para obtener el agua necesario por sus obras. *“Por lo tanto la empresa abre pozos de agua con una capacidad fenomenal [sic] mientras, al lado, en Cumandaroti, los comunitarios pierden sus pocas hectáreas de maíz porque persiste la sequía. Esta inutilidad de los recursos naturales para promover el desarrollo local no se puede resolver sino con la participación del Estado”*¹⁴.

El caso del campo Margarita ilustra que los contratos hechos con las empresas petroleras no incluían cláusulas vinculantes sobre el desarrollo económico local, ni le permiten al Estado vigilar adecuadamente las actividades en las explotaciones petroleras ya que las empresas podían impedir el ingreso de los controladores estatales¹⁵. El vicemi-

nistro de medio ambiente, Carlos Valenzuela, admite: *“Las normas no están bien hechas, hay que cambiar eso sin castigar demasiado a la empresa de forma que el proceso de exportación no se vuelva inviable. Al mismo tiempo, esa declaración es la capitulación estatal ante intereses privados productivos, como subraya Gómez Vales, en el proceso de la Capitalización es “ejecutada por el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, entre 1993 y 1997, deja a los bolivianos sin gas y convierte al Estado en una repartición administrativa de los intereses petroleros internacionales, sin ninguna capacidad de gestión y control, sino la de secundar acuerdos entre empresas”*. Donde falta la regulación social del Estado, existe el *“paternalismo idílico de la caridad petrolera”*¹⁶. Por ejemplo, la empresa Repsol piensa “donar” postas sanitarias a los indígenas. Pero la mayoría de los proyectos sociales ni se han iniciado y los gastos de un único puente que Repsol construyó en uno de sus campos petroleros supera por 30 veces los inversiones planificados en los proyectos sociales.

La realidad del campo Margarita no es solamente un ejemplo de neo-colonialismo, sino que además es un caso que ilustra la debilidad del Estado. Esa fragilidad facilita el “saqueo” de los recursos naturales: el Estado débil no puede insistir en la redistribución de recursos en beneficio a los pobres, el Estado débil fortalece los fuertes y el Estado de Derecho se convierte en la ley del más fuerte. Ese es uno de los factores que explica el protagonismo de los movimientos sociales por un Estado interventor y la demanda por más participación popular.

Esto explica también por un lado el resultado del referéndum vinculante y por otro la proporción relativamente alta de participación electoral; a nivel nacional alcanzó casi un 60% de los votantes registrados, apenas un 10% más baja de la concurrencia usual en elecciones municipales o presidenciales en el país. Pero se sabe de la experiencia internacional que en un referéndum usualmente participan mucho menos votantes que en elecciones generales; por ejemplo el referéndum en Venezuela convocado el año 1999 para la revalidación de la constitución contó con una abstención del 55%, y el año pasado en Colombia el referéndum sobre una serie de reformas tuvo una abstención de 75%, mientras el reciente referéndum en Bolivia sólo tuvo una abstención del 40%¹⁷.

La problemática todavía tiene otra faceta. Tal como explica Adolfo Gilly, existe una asombrosa dife-

¹² “Derecho indígena vs. Petroleras. Donde hay hidrocarburos, hay indígenas...campo Margarita”, Pulso reportajes, 7-13 Mayo 2004, p. 2-3.

¹³ PNUD (2002).

¹⁴ “¿Cómo viven los indígenas y las petroleras? Margarita, el inconveniente de haber nacido guaraní”, Pulso reportajes, 7-13 Mayo 2004, p. 4-5.

¹⁵ “Falta normativa y planificación del Estado”. Entrevista con Carlos Valenzuela, Pulso reportajes, 7-13 Mayo 2004, pág. 6-7.

¹⁶ “¿Cómo viven los indígenas y las petroleras? Margarita, el inconveniente de haber nacido guaraní”, Pulso reportajes, 7-13 Mayo 2004, pág. 4-5.

¹⁷ “594 de cada 1000 electores fueron a votar”, La Razón, 19 de julio 2004, p. A9.

rencia entre la igualdad legal y la desigualdad social: desde 1952 los “indios” están reconocidos como ciudadanos y tienen todos los derechos asociados, pero la ley es una cosa y la vida cotidiana otra. En la vida cotidiana predomina la idea de la “dominación natural” y la subordinación racial de los indios a los blancos. *“Esta lógica en la relación de dominación y subordinación fue impuesta por los Conquistadores y es la que desde entonces da la coloración general a todas las relaciones sociales. Esta coloración racial de la subalternidad [sic] conlleva un componente específico: el imaginado derecho hereditario al mando esta “naturalizado”. La dominación se sustenta en la convicción arraigada en la conciencia de los dominadores de la existencia de una desigualdad genética entre ambas partes. Las Repúblicas oligárquicas de los criollos heredan y reproducen en su cotidianeidad esta dominación natural, aunque las hayan declarado abolidas en sus leyes”*¹⁸. Es esa paradoja entre la igualdad legal y la desigualdad social que está reflejada en la explotación de recursos naturales en la historia boliviana y se repite en el campo Margarita. El catalizador “gas” reveló la discrepancia entre la visión de la ley y la realidad cotidiana que ha sido muchas veces el origen de las recurrentes insurgencias indígenas en Bolivia.

Nacionalismo y la instrumentalización del gas

La disputa alrededor del aprovechamiento del gas demuestra que el Estado – hasta los hechos de octubre el año pasado - no favorecía el ejercicio de prácticas democráticas, como por ejemplo la búsqueda de una compensación de intereses entre distintos grupos sociales. Al contrario, el Estado, controlado por una elite política tradicional, está todavía infiltrado por normas de orientación y hábitos sociales que se articulan en el patrimonialismo, el nepotismo y otros elementos político-institucionales “tradicionales”, que son, desde el principio, anti-plurales.

Pero según el analista político Felipe Mansilla, la sociedad civil tampoco ayudaría a superar el Estado en su papel de un “multiplicador de prebendas y canonjías contemporáneas: [sic] extensos sectores de la población boliviana protestan contra el mal gobierno y sus efectos, pero simultáneamente se adhieren a valores normativas y a rutinas muy difundidas que hacen imposible [sic] una modificación realmente seria de las prácticas publico-políticas irracionales y más bien contribuyen a la

¹⁸ Adolfo Gilly, p. 20-21, Adolfo Gilly (2003), *Historias desde adentro*. La Tenaz persistencia de los tiempos, en: Hylton F. et al, *Ya es otro tiempo el presente*. Cuatro momentos de insurgencia indígena, La Paz: Muela del Diablo Editores, p. 18-38.

*preservación de la mentalidad colectiva tradicional”*¹⁹. Quiere decir, que también ciertos grupos, distintos a las elites, buscan tanto protagonismo y ventajas sectoriales del tema del gas, de la misma manera que lo hace esa elite.

En estos discursos, el gas está instrumentalizado por los líderes de los movimientos sociales para acumular poder, y poder demostrar que se cuenta con ese poder. A fin de justificar sus posiciones, los líderes sociales, especialmente los sindicales, usan un difuso nacionalismo en combinación con populismo, en contra de una política neoliberal respecto del gas. Apelan a afirmaciones tales como “quien exporta el gas, es un traidor de la patria”, “quien vende el gas, es antipatriótico” etc., o sea, no se argumenta en una base elaborada, sino se reduce el complejo tema de la explotación del gas a una oposición blanco-negro. Por cierto que la elite hace otro tanto, y replica que “exportar gas es promover el crecimiento económico”, “quien impide exportar gas desencadena la pobreza”, etc. En esos discursos siempre hay una posición buena y otra mala, nítidas y opuestas.

Recientemente, estas simplificaciones han sido utilizadas para “vender”, como un caballo troiano, demandas sectoriales que pueden o no estar vinculadas con el tema en cuestión. En ese sentido, en un país tan dividido como Bolivia, el nacionalismo siempre sirve a los populistas para unir la población a corto plazo. Bajo el paraguas de responder al neo-colonialismo, el gas y el nacionalismo unen aun más, porque todos se sienten de una o otra manera excluidos, marginalizados y difusamente explotados. Algunos por que temen que se les impida vender gas, otros porque no desean que simplemente se lo exporte, y así sucesivamente.

La narrativa del gas neocolonizado en un contexto nacionalista ofrece claras explicaciones sobre el por qué y por quién. Pero estas simplificaciones y populismos son peligrosas para una democracia, porque abren aún más el camino para actitudes anti-democráticas y llegan al extremo de generar xenofobia. La instrumentalización del gas en discursos sindicalistas resulta fatal, porque *“la forma en que esas buenas razones son mal utilizadas [sic] ha degradado el espíritu constructivo de las confrontaciones”*²⁰ y allí empieza el círculo vicioso de la destrucción y la desestabilización de los fundamentos democráticos y la reproducción de los

¹⁹ H. C. F. Mansilla (2002): *La mentalidad tradicional como obstáculo a la democratización en el caso boliviano*. Factores históricos y culturales en los procesos de modernización, *Revista Estudios Políticos*, 118: 39-64.

²⁰ Renzo Abuzzese (2004), “La huelga instrumental”, *La Razón*, 15 de Junio, p. A4.

valores tradicionales, que puede terminar en actitudes antipluralistas y autoritarias. Finalmente, el discurso nacionalista también logró escalar posiciones en la agenda internacional, al vincular la exportación del gas con la mediterraneidad.

Un ejemplo de la instrumentalización de la política nacional de gas es la reciente huelga de los maestros de colegios estatales. La huelga se inició pidiendo un aumento salarial, pero más adelante paso a exigir la nacionalización de las petroleras y se llamó a boicotear el referéndum sobre el gas. Es posible que este paso fuera una respuesta a las críticas de los padres de familia y de amplios sectores sociales hacia esa huelga, y el creciente reclamo para que los “flojos” maestros retornaran a sus aulas. El vínculo entre salarios y el gas se establecen, según el líder del gremio, Vilma Plata, por el troskismo del cual es partícipe y la revolución obrero-campesina por venir²¹. Este tipo de debate público deja mal parada a algunos líderes pero además erosiona la legitimidad de los mecanismos de protesta ciudadana.

Esa problemática se repite cuando algunos líderes sociales aprovechan el tema del gas para sus propias disputas de poder y liderazgo dentro de las organizaciones sociales. Existen varios casos en ese sentido que incluyen inexplicables protestas, desconocimientos mutuos de liderazgo, y cambios de una tendencia a otra. Incluso Felipe Quispe promovió varias veces bloqueos en los meses pasados para demostrar el respaldo de “sus bases” en la población, con el resultado de que los mismos bloqueadores, al ser entrevistados, no sabían cómo responder a la pregunta de los motivos de tales acciones de fuerza²². Junto con la instrumentalización del gas viene a menudo la violación de los derechos de otros y la reproducción del autoritarismo y violencia, tales como acciones contra jefes del gobierno o disciplinamiento interno de las bases sindicales con represalias contra aquellos que no participan²³.

Se sospecha que el discurso de algunos dirigentes radicales sobre el referéndum, como de Jaime Solares o Roberto de la Cruz, se desarrolló también para lograr protagonismo personal. Estos sugerían que las cinco preguntas eran una “trampa” del

gobierno sosteniendo que si bien el voto iría en una dirección (la nacionalización), el gobierno podría tomar otras acciones, de tipo neoliberal, invocando una legitimación desde el referéndum. Por eso muchos rechazaron el referéndum y llamaron a boicotearlo reclamando medidas más drásticas, como impedir a través de bloqueos o la quema de materiales electorales que la gente pudiera votar.

Por supuesto que son válidas las preguntas sobre porqué en un país con una tasa de analfabetismo tan alta hay que presentar una papeleta de voto con tantas vueltas lingüísticas; también es cierto que el gobierno hizo una fuerte campaña de información para que la gente votara “sí” en todas las preguntas lo que se puede entender como una cierta manipulación. Pero el resultado más importante del referéndum fue que la población apoyó un proceso democrático y la búsqueda de soluciones constructivas, pacíficas y negociadas dentro de la institucionalidad del país; no apoyó el conflicto y el “autobloqueo” como promovieron algunos dirigentes radicales.

El percibido “autobloqueo” se basa en el conflicto perpetuo. Bajo esa idea la acumulación se hace por el conflicto, y tanto la negociación como los acuerdos consensuados son evaluados negativamente; se invoca siempre un nuevo paso de radicalización del conflicto. Eso explica algunas evaluaciones que reaccionan frente a ese estado de cosas; como comenta el sociólogo Renzo Abuzzese: *“La declaratoria de huelga se ha transformado en el mecanismo mediante el que todo el que desea posicionarse con vistas a las elecciones municipales, o desea remarcar su liderazgo, posicionarse como un nuevo líder o si lo mueven intereses que podrían aventajarlo, solo tiene que declarar huelga, exigir sus soluciones “en el acto”, de inmediato, con carácter perentorio so pena de “radicalizar” las medidas. [sic] Las marchas del magisterio, la mayoría de las marchas de la COB y otras en realidad movilizan prebendas, tickets y amenazas”*²⁴.

Las estrategias y el discurso usado por algunos sectores de la sociedad civil son profundamente anti-democráticas, pues las negociaciones entre grupos sociales que buscan una compensación de intereses son solamente posibles si los grupos respetan los derechos de los otros y si el intercambio de opiniones se puede realizar sin amenazas. Lo esencial de una democracia es el respeto de los derechos de la minoría por la mayoría. Entonces, del mismo modo como reina la injusticia, el nepotismo y el caudillismo en el aparato estatal, otros tantos ejemplos se repiten en sectores de la sociedad civil; tanto como autoridades estatales pierden

²¹ Víctor Orduna y Gustavo Guzmán (2004): “El trotskismo y la revolución perseguida”, Pulso, 11-17 Junio, no. 251, p. 12-13.

²² El ejemplo más reciente son los bloqueos en el altiplano; “Nuevos bloqueos bajo una nebulosa de reclamos”, Pulso, 11-17 Junio 2004, 251: 14-15.

²³ Otro ejemplo reciente es el bloqueo en Tiahuanacu, una ciudad turística cerca de La Paz; “Tiahuanacu, a regañadientes”, Pulso, 11-17 Junio 2004, no. 251, pág. 15.

²⁴ R. Abuzzese (2004).

su legitimidad en tomar actitudes antidemocráticas, lo hacen también actores de la sociedad civil que aplican estrategias y un discurso cuales buscan crear un ambiente de enfrentamiento y convulsión en vez de negociación y consenso. El autoritarismo de unos y otros se alimenta mutuamente. El analista político Carlos Toranzo describió este fenómeno en una de sus entrevistas con el canal de Televisión ATB como un autoritarismo predominante en ambos sectores de la sociedad, en el que el autoritarismo dentro del Estado ganaría legitimidad y se fortalecería cuanto más se expresara el autoritarismo en sectores de la sociedad civil y viceversa.

La salida de este círculo vicioso fue mostrada por el pueblo: A pesar de algunos intentos de bloqueo e amenazas en Senkata, en un barrio de El Alto, los alteños – los “revolucionarios” del año pasado en la “guerra de gas” - acudieron a votar en una manera pacífica, cumpliendo con el derecho por lo cual lucharon el pasado octubre. En igual manera votaron los bolivianos en todo el país. Esa actitud de la población demuestra que la ciudadanía en general no apoyó el cambio de la posición de algunos dirigentes, que en octubre reclamaron un referéndum vinculante de gas, pero en la hora de cumplirse con la medida se opusieron fuertemente a su realización. Más bien, se alejaron de los dirigentes más radicales insultándoles el día del referéndum, sosteniendo que ellos deberían madurar y que ya no les representaban. A consecuencia de estas reacciones ciudadanas negativas algunos dirigentes cambiaron rápidamente sus posiciones de la manera más drástica y fueron a votar²⁵.

El resultado del referéndum tiene varios “ganadores”. Por un lado la ciudadanía, en tanto potenció la institucionalidad democrática e impidió que se concretaran las amenazas; por otro lado el presidente Mesa, en tanto su propuesta tuvo lugar. Pero también fue un “ganador” el MAS, que se confirmó como un actor estratégico en la vida del país²⁶. Evo Morales apoyó, aun de una posición crítica, el referéndum de gas desde el inicio. Los resultados del referéndum demuestran la influencia del partido en la opinión pública: la mayoría de la población votó justamente bajo la propuesta de Morales; en algunos departamentos es obvio que la recomendación del MAS por votar “sí” en las primeras tres preguntas y “no” en los últimos dos fue tomada muy en cuenta. El referéndum confirmó la importancia del MAS, y reforzó su transición desde su origen desde un movimiento social considerado

como “radical” y “bloqueador” de los partidos tradicionales, hacia una fuerza política democrática y alternativa a la elite tradicional.

Conclusiones

En varios sentidos, la política nacional de gas causó y todavía causa movilizaciones sociales por su fuerte vinculación con “lo político”. Primero, la cuestión por el mejor aprovechamiento de los recursos de gas reveló una discusión ideológica sobre el paradigma neoliberal sobre el desarrollo en Bolivia, vigente desde el año 1985. La discusión “post-octubre” inició un modesto cambio de paradigma sobre el papel del Estado en la economía. Segundo, el tema del gas desencadenó también un “viejo-nuevo” debate sobre la inclusión y la exclusión social, económica, y política y el papel del Estado en la sociedad para corregir estas múltiples desigualdades. Existen intentos para iniciar un profundo cambio socio-político; se ha dado un primer paso con el referéndum, el próximo es la convocación de una Asamblea Constituyente.

Aunque se abrió una nueva etapa en la política boliviana con un frágil proceso de reconciliación social, el gobierno está amenazado por “*restos de la insurrección no consumados*”²⁷ que parecen convertir el referéndum sobre el gas en un plebiscito sobre el futuro de la sociedad. La agresividad con la cual algunos líderes sociales exijan sus reclamos y el autoritarismo con lo cual responden partes de la elite tradicional indican que el proceso de democratización no está concluido. Existe cierto optimismo, a pesar de nuevas incertidumbres y amenazas anunciadas tras el referéndum por algunos dirigentes radicales reclamando inmediatas medidas. Se puede afirmar que el día después del referéndum puede marcar el inicio de una profunda democratización del país, y los campos gasíferos y petroleros pueden ser realmente una doble bendición para Bolivia: la esperanza de un desarrollo económico exitoso mano a mano con un profundo cambio político-social de la sociedad boliviana y sus instituciones. Si a partir de ahora en adelante sectores de la sociedad boliviana – sean los movimientos sociales, los partidos o el gobierno – se pierden en largas luchas destructivas sobre la interpretación de los resultados del referéndum en vez de tomar decisiones e implementar el nuevo paradigma político, una vez más se dirá que la compleja circunstancia boliviana no es fácil a superar.

S. Stockstrom es socióloga, investigadora asociada de D3E residente en Bolivia.

²⁵ “La consigna de boicot perdió frente a la respuesta democrática”, La Razón, 19 de Julio 2004, p. C5.

²⁶ Fernando Mayorga (2004): “El MAS es un actor estratégico en la vida del país”, La Razón, 19 de julio, p. A24.

²⁷ Editorial: “Los conflictos paralizan a Mesa”, Pulso, 4-10 de Junio 2004, no. 250, p. 7.

Documentos de Discusión Global – Números publicados

- No. 1.** A favor de un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana, por Oscar Ugarteche (Perú) y Alberto Acosta (Ecuador). Marzo 2003.
- No. 2.** La crisis argentina y el Mercosur. Héctor Alimonda y Ruy de Villalobos (Argentina). Julio 2003.
- No. 3.** La reciente crisis financiera en Argentina, Brasil y Uruguay. Análisis comparativo, por Joachim Becker (Austria). Julio 2003.
- No. 4.** Derechos Humanos y Globalización. Un análisis preliminar para América Latina, por Natalia Ayala (Argentina). Julio 2003.
- No. 5.** Globalización y evaluación del riesgo país. Metodologías y situación en América Latina, por Denise Gorfinkiel y Rocío Lapitz (Uruguay). Agosto 2003
- No. 6.** Índice de riesgo país alternativo. Metodología y cálculo, por Denise Gorfinkiel (Uruguay). Junio 2004.
- No. 7.** Economía política del riesgo país alternativo, por Eduardo Gudynas y Denise Gorfinkiel (Uruguay). Julio 2004.
- No. 8.** Movilización social y política del gas en Bolivia, por Sanna Stockstrom (Bolivia). Julio 2004.



D3E es una iniciativa para promover y apoyar estudios y acciones en los temas del desarrollo en América Latina, atendiendo especialmente sus aspectos económicos, sociales y ambientales. Los principales temas de interés incluyen las estrategias de desarrollo, los procesos globales, y el papel de la sociedad civil. Las actividades se nutren tanto de acciones propias de la institución, como en el apoyo y colaboración con otras organizaciones en todo el continente.

D3E publica la serie *Carta Global Latinoamericana* con artículos clave sobre globalización, desarrollo y sociedad civil; los Documentos de Discusión Global; la serie *Observatorio de la Globalización* que revisa y difunde estudios e indicadores sobre los procesos globales; y el boletín electrónico *Globalización América Latina*. Además mantenemos el sitio www.globalizacion.org donde se pueden encontrar versiones gratuitas de todas nuestras publicaciones. El programa de globalización de D3E es apoyado por la Fundación Ford.

D3E – Magallanes 1334, Montevideo. Casilla de Correo 13125 Montevideo 11700, Uruguay. [d3e @ internet.com.uy](mailto:d3e@internet.com.uy) – www.globalizacion.org
